

## RELACIONES HISPANO-PORTUGUESES

## EL GOBIERNO ESPAÑOL Y LOS EMIGRADOS

La característica de la política española en el actual período son los asuntos exteriores. El problema de Marruecos, con la serie de enlaces internacionales que constituyen en estos momentos la preocupación de las grandes potencias, bastaría ya, seguramente, para dar empleo a la actividad de nuestros gobernantes; pero a esta cuestión ha venido a unirse recientemente, también en la política exterior, otra que, si no alcanza tan graves proporciones, no puede ser mirada con negligencia por los españoles, en atención a la vecindad y a la influencia que en nuestra política interior pudiera alcanzar. Nos referimos a la situación especial creada en algunas regiones españolas con motivo de la reciente revolución portuguesa.

Desde hace tiempo vienen publicando los periódicos informaciones contradictorias, protestas y reclamaciones que están en abierta pugna unas con otras, dando lugar a que en la opinión imparcial se haya producido un verdadero estado de confusión así respecto a lo que en realidad sucede en Portugal como al juzgar la actitud del Gobierno español en su manera de acoger y tratar a los súbditos portugueses refugiados en nuestro país.

Monárquicos y republicanos lusitanos manifiestan igualmente desconfianza, alegando los primeros que son objeto de vejaciones y molestias, que no podían esperar de la hospitalidad española, denunciando uno y otro que el Gobierno portugués continúa haciendo a los portugueses, por medio de sus agentes, objeto de sus persecuciones; siendo de notar que estas quejas y estas protestas encuentran, sobre todo en la prensa española de la derecha, ambiente favorable y aun campeones decididos, dispuestos a mantener el perfecto derecho que asiste a los monárquicos portugueses para dedicarse en la proximidad de la frontera a laborar tranquilamente en favor de la restauración de las instituciones que les son caras.

Por otra parte, los republicanos, tanto portugueses como españoles, se quejan de que una persecución activa ponga término a las reuniones y preparativos de los monárquicos, censurando al Gobierno por no interiorizar éstos en el centro mismo de Castilla, única manera, dicen, de demostrar que el Gobierno español cumple fielmente con el por tugues los deberes que el derecho de gentes impone en tales circunstancias a los Estados amigos.

Esta misma contradicción de opiniones, este general disgusto de monárquicos y republicanos portugueses deberían bastar y bastan seguramente, a juicio de toda persona imparcial, para demostrar que el Gobierno español, resistiendo por igual a las exageradas pretensiones de unos y otros, cumple fielmente sus deberes, si bien teniendo que lamentar que el encono de las luchas políticas impida a unos y otros reconocer la lealtad con que procede y la esmerada actividad con que limita su acción a la práctica de los deberes que el derecho internacional impone, debiendo a que no podía sustraerse sin incurrir en la censura de cuantas naciones figuran en la comunidad de los pueblos civilizados.

La frecuencia con que en la Historia se han repetido situaciones semejantes hace que el caso de los emigrados políticos portugueses refugiados en nuestro país se encuentre perfectamente estudiado y definido, pudiéndose desde luego afirmar que la conducta observada constantemente por el Sr. Canalejas de tal modo se ajusta a los principios y reglas vigentes en las relaciones internacionales que cuando detalladamente se exponga no tendrá la crítica más severa reparos ni objeciones que oponer, y en cambio reconocerá que no era empresa fácil y llana la realizada por el actual presidente del Consejo manteniéndose siempre en la imparcialidad más estricta, no dejándose ganar ni por simpatías, fácilmente explotables, ni mucho menos cediendo a la imposición y a la amenaza, que, aunque formuladas de manera enconada y solapada, dejaban traslucir con bastante claridad el fin político a que iban encaminadas.

Para aquellos de nuestros lectores poco familiarizados con este aspecto especial de la historia de las revoluciones contemporáneas y con los principios del derecho internacional a que en circunstancias parecidas han ajustado su conducta los Gobiernos, no será ocioso un breve recuerdo de unas y otros, sirviéndonos de guía para esta parte del presente artículo los notabilísimos trabajos que acerca de la materia ha publicado un compatriota ilustre, cuyo nombre goza de merecida autoridad entre los tratadistas de derecho internacional de nuestros días.

Nos referimos al marqués de Olivart, que a las dotes de vasto saber y erudición que avaloran sus obras une un juicio sereno e imparcial, que excluye todo temor de que sus afirmaciones puedan tener otro origen que el puro y sereno de la investigación científica.

Todos los tratadistas están conformes, y así se consigna en todas las legislaciones, que la abstención individual por los súbditos de un Estado de toda ofensa o daño hacia otro estado es el principio de la no intervención política de los estados en los asuntos interiores de los otros y de la regla según la cual cada Estado es responsable de las lesiones a la independencia y a la libertad cometidas en los lugares sometidos a su dominio y que no ha sabido impedir ni castigar. Uno de los tratadistas de mayor autoridad en la materia amplía este concepto con las siguientes palabras: «La aplicación a lo que ocurre en nuestras fronteras fronterizas con Portugal salta desde luego a la vista: «El derecho internacional no solamente obliga a los Estados a impedir que sus súbditos realicen actos contrarios a la consideración y a los intereses de los pueblos y de los

Gobiernos amigos: les impone también el deber estricto de oponerse en el territorio a toda maquinación o combinación, de cualquier clase que sea, que tenga por objeto poner en peligro la seguridad de los países con los cuales se mantienen relaciones de paz, de amistad y de buena armonía.

Añade Calvo, que es el tratadista a que nos referimos, que, según algunos publicistas, estas obligaciones no existen cuando se trata de refugiados políticos extranjeros; pero declara severamente que enunciar tales doctrinas es no comprender los deberes morales que unen entre sí a las naciones y legítimamente implican a todos los criminales o delincuentes internacionales: la traición, la desertión, la excitación a la guerra civil, etc.

Importa poco, según él, que los súbditos territoriales no se asocien a los hechos culpables: la criminalidad intrínseca del acto y la responsabilidad del Gobierno que lo deja cometer son siempre las mismas. Es decir, que el Gobierno que no se opone a la realización de actos semejantes se hace cómplice del atentado y no puede declinar las consecuencias de su culpable conducta (Le Droit intern. th. et prat., párrafo 1.298). Fiore reproduce la misma doctrina, indicando la obligación en que se encuentran todos los Estados de tener un sistema de leyes, un procedimiento criminal propios para reprimir las ofensas o los daños causados a las potencias extranjeras. Pradier-Fodéré cita como deber correlativo al derecho de conservación la obligación estrecha que tiene cada Estado de respetar los derechos a la unidad, a la indivisibilidad y a la indisolubilidad de los otros Estados; el de no favorecer en un interés egoísta conspiraciones, y señala además varios tratados hispano-americanos que han impuesto deberes semejantes.

Fácil sería multiplicar las citas; pero sólo añadiremos el concepto expuesto por Kleen, que, como es sabido, profesa ideas completamente nuevas sobre el reconocimiento de la beligerencia, el cual añade a las consideraciones comunes a todos los autores que dejamos expuestas que los motivos que puedan alegarse para llevar la perturbación a un país no deben de ser examinados ni tenidos en cuenta por el extranjero, pues «todo Estado soberano es juez exclusivo de sus propios asuntos mientras que posea las condiciones de la soberanía; es decir, mientras tenga poder suficiente para mantener el orden en los límites de su territorio».

En resumen: las anteriores ideas pueden condensarse en las siguientes palabras de otro tratadista, Rivier, que dice: «El derecho de conservación se ejerce en la represión de las empresas hostiles dirigidas contra la integridad del territorio o de la fortuna pública, sea por estados o partidos extranjeros, sea por enemigos interiores, por insurrectos o por revolucionarios».

Las agitaciones fomentadas, mantenidas, aunque sólo sea toleradas, en un país contra la integridad del territorio de otro, so color de nacionalidad, de revancha, de solidaridad religiosa, etcétera, son directamente contrarias al derecho de conservación y constituyen a este título violaciones positivas del derecho de gentes.

El Estado en el territorio del cual existan tales agitaciones tiene el deber, tan pronto le sean señaladas, de represarlas o, lo contrario, se hace cómplice de ellas.

Los Estados tienen el derecho de exigir de la nación que por debilidad o por cualquier otro motivo permitiera a los enemigos del orden público que convirtieran su territorio en foco de conspiración o de propagandas para ellos perjudiciales, que cese de tolerar estos enemigos y que vigile y reprima sus manejos, o si son extranjeros, que se niega a darles asilo, que los expulse o haga lo que así se le pide, en justicia sería cómplice de los conspiradores e incurriría en grave responsabilidad, faltando a los deberes que se derivan de la comunidad internacional. Wharton, tratando de los derechos de propia conservación, se pronuncia en el mismo sentido. «El Soberano—dice—tiene el deber de impedir que se realicen en su territorio operaciones hostiles contra un Estado con el cual se encuentra en paz es responsable de una grave infracción del derecho internacional».

Resulta, por tanto, que el principio del derecho absoluto e ilimitado del Estado de expulsar de su territorio al extranjero que perturbe su tranquilidad o pueda poner en peligro sus relaciones de amistad con el país del cual es súbdito o con otro tercer Estado se halla unánimemente reconocido por todos los autores y por todas las legislaciones, pues hasta Inglaterra, que juntamente con Grecia venía constituyendo una excepción, ha venido en la ley de 1905 (Aliens Act) a autorizar al secretario de Estado para expulsar del Reino Unido a los extranjeros que hubieran dado lugar a que se cometiera un crimen o un delito o a que fueran mendigos o vagos o llevaran una vida poco higiénica.

Fácilmente se comprende la amplia y elástica interpretación a que se prestan estos últimos casos. Por lo demás, la opinión unánime de la Ciencia en este punto había sido ya consignada en las resoluciones del Instituto de Derecho Internacional en sus reuniones de Lausanne, de 1888, y de Ginebra, de 1892.

No son raros los ejemplos de casos en la historia contemporánea en los cuales las potencias más liberales han procedido a la internación de súbditos extranjeros, reduciendo a esta forma moderada su indiscutible e indiscutida facultad. En la revolución de Baden de 1849 el Gobierno suizo procedió a internar a los revolucionarios vencidos,

siendo causa estas medidas de bastantes contrariedades para el Gobierno de la Confederación, porque cada nueva expulsión daba motivo a la oposición radical para volver a su tema de humanidad revolucionaria. A pesar de eso, desde el principio de Agosto a fin de Noviembre más de 60.000 extranjeros, según se consigna en el *Anuario histórico* de Lesur, causaron a Suiza desórdenes, dificultades y gastos extraordinarios. En 1866, cuando el Rey Jorge de Hannover perdió su corona, de un modo no menos trágico y repentino que el Rey D. Manuel, también sus partidarios quisieron formar la legión hannoveriana, obligando al Gobierno francés a alejar a los jefes de la insurrección carlista, durante la insurrección carlista, siendo digno de mención, por referirse a nosotros, lo que a este propósito dice Despagne: «Evitando el expulsar a los refugiados, para atender a consideraciones de humanidad o de justicia, puede prohibirse la permanencia en ciertas localidades, especialmente en las inmediatas al país contra el cual querían dirigir sus ataques, y es así como durante la insurrección de 1872 el Gobierno francés intentó hacer acudir a la frontera belga o alemana a los carlistas que se hallaban en su territorio, procediendo de igual modo en 1885 con respecto a los emigrados republicanos».

Un texto de Monzani, autor de la monografía que más completa sobre la materia, puede servir mejor que todo lo que pudiéramos decir por cuenta propia para poner término a esta parte de nuestro trabajo.

«El desterrado político—dice—goza en el estado de refugio de una protección que recuerda mucho el asilo de los tiempos pasados. No es un delincuente: es más bien un vencido; la elevación de su ánimo, la audacia de su carácter le han obligado a sostener quizá con demasiada violencia lo que él considera el bienestar de su país; protegerle contra las pasiones y venganzas de sus compatriotas es un deber para los Estados pero en compensación de ello tiene el emigrado otros deberes especiales. En cuanto pone el pie en el ajeno territorio debe cesar la propaganda activa y abstenerse de todos los actos que constituyan un peligro y un embarazo para el estado que lo hospeda, y esto es, por desgracia, lo que olvidan casi todos los emigrados. Van al extranjero para poder con más libertad preparar el triunfo de sus ideas, pero desgraciadamente una mayor fuerza, siendo causa para el Estado que los recibe de las clases de peligros. Por una parte, el refugiado puede excitar a los habitantes a una conducta hostil a las autoridades locales, y con ello comprometer la seguridad pública interior; o puede, sin turbar ésta, amenazar los derechos de un Estado extranjero. En uno y otro caso se impone evidentemente como necesaria la medida de la expulsión».

No puede un Estado recibir con indiferencia las justas reclamaciones de otro contra la conducta de un extranjero que se halle en su territorio. La expulsión representa en este caso una legítima ayuda y un medio necesario para impedir que se alteren las buenas relaciones internacionales. Porque si las autoridades locales dejen al extranjero en plena libertad de conspirar y de servir de nuevo lugar de su residencia como punto de reunión para otros revolucionarios, asumirá con respecto al otro Estado las responsabilidades de todos los desastrosos efectos que se derivarán de esa inerte descendencia, dichas autoridades podrían ser consideradas como cómplices del emigrado, y se expondrían a las consecuencias de un acto que, en justicia, se podría considerar como hostil».

Los textos precedentes, que sería fatigoso reproducir en su totalidad, demuestran que los principios generales que rigen en el derecho internacional respecto a la conducta que debe observar un Gobierno con los emigrados políticos de otro Estado en circunstancias parecidas a las actuales en nuestras provincias fronterizas con Portugal.

Respecto a la legislación española, el derecho del Gobierno a disponer la internación de los emigrados políticos está consagrado en la Real orden de 12 de Junio de 1888, suscrita por el señor Posada Herrera, que es el texto legal vigente sobre la materia, que dice así: «Si (el extranjero) resultase ser emigrado político se le inhabilita a que elija pueblo de residencia a 120 kilómetros de las fronteras de Francia y Portugal, no siendo punto que por las circunstancias pueda ser sospechoso».

Además hay que tener presente que la Ley de Asilo de 1888, demostrando todas ellas que es inconcusa la potestad gubernativa para aplicarlas, ya que todas ellas están vigentes y además están de acuerdo con los principios generales a que anteriormente queda hecha referencia.

Demostrado el deber del Gobierno de no permitir en el territorio nacional ninguna actividad que pueda estorbar a una nación amiga que atentatorio a su seguridad, precisa recoger la objeción de los que vienen sosteniendo que los emigrados monárquicos portugueses refugiados en las provincias fronterizas de Galicia se han limitado hasta el presente a acogerse a la hospitalidad que en nuestro país les brindamos, absteniéndose de tomar parte en conspiraciones ni complotos contra el nuevo régimen establecido en su patria. Esta

objeción está de tal manera destruida por los hechos que faltaríamos a toda imparcialidad si fuéramos a darle importancia. En efecto: ¿qué objeto sino el producir una contrarrevolución en Portugal podían tener las armas enviadas por la vía terrestre y por la marítima, y que gracias a la intervención de las autoridades españolas fueron apresadas, sino promover un movimiento contrario a la República? Hechos de tal magnitud, oficialmente confirmados, realizados a la vista de todo el mundo, no permiten que pueda decirse en serio que los monárquicos portugueses establecidos en Orense y Pontevedra se abstienen de conspirar, no dando lugar, por tanto, a quejas ni peticiones del Gobierno de su país, que el nuestro, en justicia, no puede menos de atender.

El Gobierno español, no pena de infringir abiertamente principios fundamentales del derecho de gentes, según dejamos demostrado, no podía menos de proceder como desde un principio viene haciendo en este asunto, aun siendo para él muy molesto y desagradable tener que acudir a la adopción de aquellas medidas que estimó indispensables para que nuestra frontera no fuera escenario de un constante reunión de emigrados, dando en cambio a éstos todas las facilidades y cuantas seguridades pudieran desear para establecerse en cualquier otra región de nuestro país donde su presencia no pudiera justificar los reos que no sin motivo—justo es consignarlo—venía expresando acerca de nuestro Gobierno el de la República portuguesa.

En cambio tienen los monárquicos portugueses acogidos en España perfecto derecho a protestar de toda molestia que se les pretenda inferir por agentes encubiertos de la República portuguesa, o, según en otros casos se ha dicho, por republicanos españoles puestos al servicio de la República portuguesa.

Las funciones de vigilancia y de policía son actos de soberanía que no pueden recaer en España, ni sobre los agentes de nuestro Gobierno, y podemos afirmar que éste no ha vacilado un momento en reprimir con toda energía y rapidez cualquier intromisión de esta clase que por los republicanos portugueses o por los republicanos españoles intentara llevarse a cabo. No podrá citarse en este punto ninguna queja o reclamación que no haya sido en el acto atendida, extremándose el celo por parte de nuestras autoridades para reprimir cualquier demasia que por los agentes portugueses o por sus amigos aquí tratara de cometerse.

Ejemplo bien reciente de ello es la inmersión, ha poco denunciada, de algunos guardias en la provincia de Orense y la detención llevada a cabo por éstos en territorio español de un sacerdote a quien perseguían. Tan pronto el Gobierno tuvo noticia de lo ocurrido reclamó enérgicamente, y admitida por el Gobierno portugués la reclamación, aceptó nuestra versión de los hechos, dio todo género de excusas y nos fué devuelto el sacerdote indebidamente detenido en nuestro territorio.

Claro es que esta entereza de conducta del Gobierno y su firme resolución de imponer a monárquicos y republicanos el respeto al derecho produce las quejas que de unos y otros llegan a las autoridades para reprimir, pero el Consejo, el cual con igual energía se opone a los trabajos de los conspiradores monárquicos, harto demostrado con los alijos de armas y el alistamiento de campesinos gallegos, como se niega con firmeza a las pretensiones exageradas de los republicanos portugueses, que en su apasionamiento pretenden que en nuestro país se persiga, o poco menos, a los monárquicos portugueses, sólo por el hecho de serlo.

No el Sr. Canalejas ni está dispuesto a incurrir en la responsabilidad que contraería el Estado español, permitiendo o tolerando la preparación de actos contrarios a la seguridad de un Estado amigo, ni llegará tampoco, por deferencia a éste, a adoptar resolución alguna que pueda interpretarse como atentatoria a los deberes de hospitalidad con los emigrados políticos, internando estos deberes con el criterio más amplio y más en armonía con los principios humanitarios.

El Gobierno tiene que mantenerse en el fiel de la balanza, y de ahí las recientes disposiciones, que tan buen resultado están dando, para impedir que continúen en la frontera los núcleos de emigrados que hasta ahora existían, y al mismo tiempo las disposiciones tendiendo a raya a los agentes portugueses, recordando al actual Gobierno, cuando la ocasión llega, que la primera condición para pedir que no se intervenga en la política portuguesa es abstenerse de todo acto que pueda implicar intervención directa o indirecta en nuestra política.

No deja de prestarse también a cierto género de consideraciones el apoyo que los partidarios de la contrarrevolución portuguesa vienen encontrando en los partidos de la derecha española, y muy especialmente en los tradicionalistas.

Como antes decíamos, nada hay más natural, y no hay que esforzarse mucho para comprenderlo, que los monárquicos españoles simpaticemos con los que en otros países profesan nuestras mismas ideas respecto a la forma de gobierno.

Como monárquicos, no ha podido menos de dolernos la caída de la Monarquía portuguesa, y si llegara un día en que la mayoría del país vecino impulsara la restauración del régimen monárquico no hay que decir que nadie con mayor gusto que nosotros vería realizarse la vuelta a las antiguas instituciones.

Pero de esto a inmiscuirnos de una manera activa y directa en la política interior del país vecino media un abismo, que no estamos dispuestos a salvar, y ante el cual estamos seguros que habrán de detenerse todas las personas sensatas, así por las razones de orden jurídico a que al principio de este artículo queda hecha referencia, como por las consecuencias gravísimas de todo orden que condujera tan desastrosa a la patria portuguesa. Unese a esto el hecho, que antes señalábamos, del apoyo

resuelto prestado por la extrema derecha a la contrarrevolución portuguesa, y que a los monárquicos constitucionales debe hacerles meditar respecto al significado y al carácter que quiera darse al actual movimiento monárquico.

Juzgando imparcialmente los hechos, examinando con el ánimo libre de todo prejuicio las circunstancias, entendemos que la conducta del Gobierno que preside el Sr. Canalejas, ya que no pueda merecer el aplauso de los exaltados de la derecha o de la izquierda, porque de la pasión veda a unos y otros, y las cosas a su verdadera luz, debe dar lugar a la inteligencia amistosa que debe dar lugar a aquellos de nuestros compatriotas que, a impulsos de un sentimiento que no podemos menos de ver con simpatía, desean el restablecimiento de la Monarquía en Portugal, nos permitimos invitarles a meditar sobre las graves consecuencias que para nuestro país podría tener el mezclarnos activamente en la política interior de un Estado amigo, dando cuerpo a sospechas y recelos tradicionales, que por mucho tiempo harían imposible una inteligencia amistosa entre España y Portugal, con grave daño de la prosperidad y de los intereses de los dos pueblos.

## Desde Barcelona

(POR TELEFONO)

## Muerte del Sr. Vallés y Ribot.

Barcelona 31.—A las siete y quince de la noche ha fallecido repentinamente en el Tibidabo, a consecuencia de un ataque de apoplejía, el Sr. Vallés y Ribot, diputado a Cortes federal.

Tan pronto como se supo la noticia marcharon al Tibidabo, en automóvil, numerosos correligionarios del ilustre federal. Los condejes Sres. Marial y Ramoneda, que carecían por el momento de otro vehículo, aprovecharon el automóvil de incendios.

Por la significación política del muerto la noticia ha producido en Barcelona mucha impresión.

A pesar de lo avanzado de la hora acudieron a los círculos políticos muchas personas, deseadas de conocer detalles.

El último acto político en que tomó parte Vallés y Ribot fué el meeting conjuntista contra la guerra, durante el cual ya notaron algunos en Vallés y Ribot señales de gran decadencia física.—Mir.

## El Sr. Portela a Madrid.—Frosos libertados.—Un rumor.

Barcelona 31.—En el expreso han marchado el gobernador civil de ésta, Sr. Portela, y para Zaragoza el de aquella provincia, Sr. García Bajo.

Han sido libertados los detenidos ayer con motivo del tiroteo frente a la Cárcel Modelo.

Corre el rumor de haber dimitido el alcalde de Sabadell.—Mir.

## El duelo de la prensa.—El entierro. El abastecimiento de aguas.

Barcelona 1.—Los periódicos publican esta mañana artículos necrológicos encomiásticos sobre el Sr. Vallés y Ribot.

Hasta *El Progreso* le trata respetuosamente.

El alcalde accidental, Sr. Serracallar, ha ido esta mañana a dejar su tarjeta en la casa mortuoria, y asistirá al entierro, que se verificará mañana por la tarde.

Se han presentado 31 proposiciones al Ayuntamiento para el abastecimiento de aguas de Barcelona.—Mir.

## Ecos de Sociedad

En la iglesia del Sagrado Corazón se ha celebrado la boda de la bella señorita Carmen Bermúdez de la Puente y Varela Cadaval, hija de la condesa de Ramiranes, con el distinguido joven D. José María Manresa y Pereda.

Fueron padrinos la madre del novio y el hermano de la novia, D. Alfonso.

Concurrieron como testigos, por la desposada, los marqueses de Villamanilla de Portela, Prádo Alcega y Leguay y por el contrayente, D. José Bermúdez de la Puente, D. Enrique González y D. Dionisio Martínez de Velasco.

Los asistentes a la ceremonia religiosa fueron obsequiados con un delicioso buffet.

Los nuevos esposos, a los que deseamos muchas felicidades, marcharon anoche en el sudexpreso para el extranjero.

La duquesa de Noblejas y su madre, la duquesa viuda, se encuentran en su castillo de Torrepedierna, en la provincia de Burgos.

Se han trasladado:

De Sevilla a San Sebastián, el conde de Bazaga; de París a Biarritz, los señores de Botella; de Pamplona a Leguay, la señora viuda de Elío; de Luchón a Biarritz, los señores de Propoy, y de Sevilla a Biarritz, el Sr. Iruretagoyena.

El capitán general marqués de Estella ha cumplido ochenta años de edad. Con este motivo recibió el general en el balneario de Mondariz, donde se halla actualmente, tomando aquellas aguas, muchas felicitaciones.

Han salido:

Para Dempiñor, el conde de Campomanes.

Para Bayona de Galicia, la marquesa viuda del Pazo de la Merced.

Para San Sebastián, los duques de Amalfi, los marqueses de Atarfe, los señores de Laiglesia y D. Carlos Díaz Guzmán.

Para Ginebra, los marqueses de Portago.

Para Deva, los marqueses de Revilla de la Cañada.

Para San Pedro del Pinatar, el general González Parrado.

Para San Juan de Luz, el conde de Torenio.

Para Los Molinos, los marqueses de Zugasti.

Para Segovia, el conde de Chesto.

Para San Martín de Pusa, el marqués de Montalvo.

Cándido LARCHE

## MADRID, INCULTO

## LOS ESCANDALOS DE AYER

Como verán nuestros lectores por la información que sigue a estas líneas, ayer se dieron en Madrid unos espectáculos bochornosos, que nos obligan hoy a elevar nuestra más enérgica protesta.

Estas pruebas de incultura que de algún tiempo a esta parte se vienen dando en las calles de Madrid y la incorrección que en la vida social demuestran ciertos individuos es cosa que ya se ha hecho intolerable. La tolerancia, el respeto mutuo, las más sagradas leyes morales, como son las de la hospitalidad, se vienen dando al olvido con tan inusitada frecuencia en nuestro pueblo que ya es hora de que volvamos por el fuero del buen nombre de Madrid.

Es preciso corregir estos abusos. No se puede tolerar que en la capital de España se determinen elementos de escándalo en sus calles y Centros, con perjuicio del buen nombre del pueblo español.

Elevamos nuestra queja al jefe superior de policía, puesto que a él corresponde la misión de velar por el orden y compostura de Madrid.

En lugar de marear a los vecinos con docenas de padrones; en lugar de dedicar a los agentes policíacos a visitar los teatros y espectáculos públicos; en lugar de perseguir a los mercederos del extrarradio porque retrasan la hora del cierre, debían dedicarse a perseguir a esas hordas de gentes incivilizadas que ayer en el Retiro atropellaron a un extranjero y dieron en el Ateísmo muestras de su intemperancia: los unos, por hacerse los chistosos; los otros, por llevar la pasión política más en alto que los sentimientos de hospitalidad y caballerosidad.

Exigimos una acción enérgica para evitar la reproducción de estos hechos; exigimos un severo castigo para los que perturban sistemáticamente la vida tranquila de Madrid y quieren poner un baldón de incultura al escudo limpio de este pueblo, de tan donosa caballerosidad y de exquisita corrección; mil veces demostrada.

Al revisar esta mañana los estimados colegas matutinos nos vemos sorprendidos por los relatos de un suceso desarrollado anoche en la tribuna pública del Ateísmo.

Procuramos informarnos de lo ocurrido; prescindiendo de los apasionados juicios de algunos de aquellos colegas al dar cuenta de este hecho, y con profunda tristeza le asociamos con otro suceso que se repitió también anoche en Madrid, en el Parque de espectáculos del Retiro, y del que con nosotros fueron testigos el ministro de la Guerra, el capitán general, el gobernador interior, el alcalde de Madrid, varios concejales y distintas distinguidas personas. A un periodista francés, que accidentalmente se encuentra en Madrid le vino en gana colocar sobre su cabeza un sombrero hongo pequeño y gris, y por ser de su agrado también se le ocurrió pasar la noche en aquel Parque del Retiro; nunca lo hubiera hecho: una parte del público que allí concurría abuchó bochornosamente al ciudadano periodista que se permitió lucir esa prenda.

Al propio tiempo se registraba en la docta sala de la calle del Prado el suceso que motiva estas nuestras líneas.

Para anoche estaba anunciada en el Ateísmo una conferencia del Sr. Homen Christó (hijo), sobre la «Situación política de Portugal».

Antes de las diez, que era la hora anunciada, veíase público bastante numeroso a las puertas del Ateísmo; pero la policía no permitía que entrase en dicho Centro, obedeciendo órdenes recibidas.

Minutos antes de la citada hora, y ante las insistentes súplicas del conferenciante, se permitió la entrada en la tribuna pública a la gente que en ella había, y se advertió bien pronto que entre los espectadores figuraban buen número de republicanos, que tosan y rumorean.

Entre los invitados al acto se hallaban varias distinguidas personas, figurando en primera línea de los asistentes la tan conocida y respetada persona, el Sr. vicepresidente, D. Rafael Andrade.

Este subió a la tribuna, acompañando a Homen Christó (hijo), el cual presentó a la concurrencia, encareciendo la atención del auditorio para que pudiera entenderle bien, ya que el conferenciante no hablaba claramente el español.

Después de breves palabras de salutación, pidió Homen Christó benevolencia, y dijo que consideraba un alto honor el hecho que concurriera a expresarse sus ideas, desfilando los más preclaros varones de España.

Hizo después una breve reseña histórica de la política portuguesa, fijándose principalmente en los momentos en que el Gabinete Alpoim fué llamado a regir los destinos de la nación lusitana.

Un espectador de la tribuna pública dió en aquel momento un estentoreo [viva la República portuguesa], que produjo formidable escándalo en toda la sala.

Como aquí arrojó, y en la tribuna pública llegaron algunos espectadores a golpearse, el Sr. Andrade mandó desalojar la tribuna, efectuando esa orden la policía, requerida al efecto, y los empleados de la Sociedad.

Una vez restablecida la calma, el Sr. Andrade dirigióse al público, recordándole los respetos que se debían al auditorio, el cual tenía iguales derechos que otros políticos o literatos a expresar sus ideas.

Recordó también el Sr. Andrade que a Homen Christó debía recomendarle además su cualidad de extranjero.

El conferenciante continuó su disertación haciendo resaltar el hecho de que el nardino Machado, que en 1898 escribió un brillante artículo elogiando al Rey D. Carlos, escribiera a los tres meses otro artículo combatiéndolo con saña, y hasta insultándolo, por el delito de haber conferido el Poder a Rivero.

Al llegar el conferenciante a este punto de su discurso un socio del Ateísmo que se hallaba ocupando una butaca exclamó: «No tolero a nadie que injurie a un amigo mío, y Machado reúne esa condición».

Nuevo revuelo y escándalo, mueras y vivas contradictorias, y como el Sr. Andrade no conseguía restablecer la normalidad, ordenó la suspensión del acto.











